

El "guatemalazo"

En 1951, Jacobo Arbenz, representante del sector revolucionario del ejército, triunfó en las elecciones y asumió la presidencia de Guatemala. Arbenz se propuso profundizar la orientación nacionalista de Arévalo y sintetizó su programa básico de gobierno en tres postulados: "Independencia económica de la nación, transformación del país en una nación capitalista y elevación del nivel de vida del pueblo". Para alcanzar estas metas, Arbenz puso en marcha la reforma agraria y emprendió un ambicioso plan de construcción de obras de infraestructura básica (carreteras, puertos y central hidroeléctrica) con el objetivo de liberar al país del monopolio sobre su economía que ejercían tres empresas estadounidenses —la United Fruit Co. (UFCO), la International Railways of Central American y la Empresa Eléctrica de Guatemala.

En 1953, la aplicación de la reforma agraria llevó a la UFCO a considerar que la política nacionalista de Arbenz afectaba sus intereses y planteó la cuestión ante del Departamento de Estado de los Estados Unidos en los siguientes términos: "De aquí en adelante ya no se tratará del pueblo de Guatemala contra la UFCO: la cuestión se convertirá en el caso del comunismo contra el derecho de propiedad, la vida y la seguridad del hemisferio occidental."

La llegada al gobierno de los Estados Unidos del Partido Republicano, más vinculado que los demócratas con los intereses de los grandes monopolios, dio lugar a que el conflicto entre la UFCO y el gobierno de Guatemala fuera convertido en un conflicto oficial entre dos países. Spruille Braden, jefe de relaciones públicas de la UFCO, afirmó en un discurso que "como el comunismo no es un asunto interno sino claramente internacional, su supresión, aun por la fuerza, en una nación americana, por una o más de las otras repúblicas, no constituye una intervención en los asuntos internos de esa nación. (De no hacerlo) podríamos perder este hemisferio al igual que perdimos China".

En el marco de la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos inició una serie de acciones diplomáticas y de propaganda —presentando el caso de Guatemala como "la amenaza roja sobre el continente"— tendientes a crear un clima favorable a la intervención. La "operación Guatemala" fue planificada no como una invasión de marines sino como un golpe de Estado a cargo de Carlos Castillo Armas, jefe de la oposición política a Arbenz. En los primeros meses de 1954, el Departamento de Estado presentó una reclamación multimillonaria al gobierno de Guatemala en concepto de indemnización por las tierras expropiadas a la UFCO y denunció que Guatemala había recibido armas "desde el otro lado del telón de acero". Este hecho, nunca completamente aclarado, dio lugar a que los Estados Unidos enviaran aviones con armas a Nicaragua y a Honduras "de acuerdo con el programa interamericano de ayuda mutua". El 18 de junio de 1954, Guatemala fue invadida desde Honduras y bombardeada por aviones estadounidenses. Arbenz encabezó la resistencia popular de civiles, campesinos y trabajadores contra los mercenarios extranjeros pero, ante la imposibilidad de sostenerla dada la desigualdad de recursos y a fin de evitar más muertes entre el pueblo guatemalteco, el 27 de junio renunció a la presidencia.

Finalmente, después de deshacerse de otros jefes militares que habían participado de la "operación Guatemala" y un nuevo bombardeo sobre la ciudad capital y sus alrededores, el 1º de julio de 1954, Carlos Castillo Armas, apoyado por los "coroneles anticomunistas" se hizo cargo del gobierno. Durante sus tres años de gobierno desencadenó una fuerte campaña anticomunista, prohibió los partidos políticos, los comités agrarios y los sindicatos y anuló todas las reformas de la década revolucionaria (1944-1954).

La discusión sobre las causas del subdesarrollo y la dependencia

LA TEORÍA DE LA DEPENDENCIA

Desde otro marco teórico, Osvaldo Sunkel y Pedro Paz contestaron a Gino Germani y a los investigadores y políticos que sostenían la "teoría de la modernización" con la "teoría de la dependencia". Estos autores afirmaron que el desarrollo y el subdesarrollo eran las dos caras de la misma moneda. Y, todavía más: que el subdesarrollo de unas sociedades era la condición necesaria para el desarrollo de otras. Desde el punto de vista de estos investigadores, en el marco del capitalismo, las sociedades latinoamericanas no tenían otra salida que el subdesarrollo.

Estas ideas fueron tomadas por numerosos movimientos y organizaciones que por esos años protagonizaron luchas políticas y armadas que tenían como objetivo el establecimiento del socialismo en los países de la región: para terminar con la dependencia —que entendían era impuesta desde el exterior— sostenían que era necesario terminar con el capitalismo.



Durante la década de 1960, en la mayoría de los países de América latina empezaron a actuar grupos guerrilleros armados. Estos grupos consideraban que sin transformaciones de fondo en el interior de las sociedades latinoamericanas no había posibilidades reales de superar la dependencia económica y política. Por esta razón, sus programas de lucha se propusieron como meta la toma del poder político del Estado. En la fotografía, guerrilleros cubanos en la Sierra Maestra. Su victoria sobre Fulgencio Batista en 1959 inauguró una nueva modalidad de lucha política en América latina.

EL ANÁLISIS INTEGRADO DEL DESARROLLO

En 1969, la obra de Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto, *Dependencia y desarrollo en América latina*, propuso un análisis integrado del desarrollo que complejizó el debate. Esta obra era, además, una de las primeras que se apartaba del enfoque que entendía lo ocurrido en América latina como derivado exclusivamente de factores externos y en términos de desviaciones del supuesto modelo de desarrollo económico y político que habían cumplido los países de Europa y los Estados Unidos. Por el contrario, los autores consideraban más adecuado un procedimiento metodológico que centraba el análisis en las condiciones específicas de la situación latinoamericana.

Este enfoque permitió una profunda revisión del concepto de dependencia. La novedad teórica consistió en dejar de pensar la dependencia como una determinación mecánica de lo interno por lo externo. Cardoso y Faletto propusieron, en cambio, considerar que en cada sociedad periférica hay grupos sociales locales que, en cada época, se benefician con la relación de dependencia y que los resultados de la lucha política y las alianzas sociales conformadas para gobernar determinan la profundización de la dependencia o el aumento de la autonomía.

La incorporación de la dimensión histórica en el análisis del desarrollo permitió a Cardoso y Faletto diferenciar conceptualmente las nociones de periferia, subdesarrollo y dependencia, tres conceptos que en el lenguaje cotidiano —y también en el lenguaje político— son utilizados en forma indistinta. La diferenciación que proponen los autores es la siguiente.

Los conceptos de *centro* y *periferia* indican la función que cada economía cumple en el mercado mundial como resultado de su vinculación histórica. Desde el siglo XVI, a partir de la formación de la economía-mundo capitalista, fueron sociedades centrales aquellas cuyas economías se especializaron en la producción de manufacturas industriales y sociedades periféricas, aquellas cuyas economías se especializaron en la producción de productos primarios para la exportación. La incorporación de esta dimensión histórico-estructural es fundamental para comprender por qué el mantenimiento de estos términos del intercambio durante casi cuatro siglos —entre América latina y Europa y los Estados Unidos— originó un proceso de capitalización creciente en las economías centrales y un proceso de continua descapitalización relativa en las economías periféricas.

Analíticamente, los autores definen los conceptos de *desarrollo* y *subdesarrollo* en relación con el grado de diferenciación del sistema productivo de cada sociedad nacional. Desde este punto de vista, es más desarrollada una economía que, además de su sector primario, ha desarrollado su sector secundario que una que no lo ha hecho.

Y, finalmente, definen *dependencia* en relación con el grado de autonomía que tiene el sistema político de cada sociedad nacional para tomar e implementar decisiones de política económica que afecten el sistema productivo o el consumo interno. Para Cardoso y Faletto, el mayor o menor grado de autonomía política está profundamente relacionado con la necesidad de contar con inversiones de capital extranjero para desarrollar el sistema productivo y también con las condiciones requeridas por los inversores extranjeros para decidir la radicación de sus capitales en el país.

Cardoso y Faletto, en 1969, afirmaban que, en cada sociedad periférica, la dependencia tenía un sustento interno: las relaciones de dominación que ejercen sobre el conjunto de cada sociedad los grupos sociales que se benefician de la vinculación con el exterior.

Osadía, acción colectiva y voluntades políticas

En 1969, Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto finalizaban su obra *Dependencia y desarrollo en América latina* con las siguientes palabras:

"Desde luego, la existencia de un 'mercado abierto', la imposibilidad de la conquista de los mercados de los países más desarrollados por las economías dependientes y la incorporación continua de nuevas unidades de capital extranjero bajo la forma de tecnología altamente desarrollada y creada más en función de las necesidades de las economías centrales que de las periféricas, proporcionan el cuadro estructural básico de las condiciones económicas de la dependencia. (...).

Pero la superación o el mantenimiento de la dependencia y de las barreras estructurales al desarrollo, más que de las condiciones económicas tomadas aisladamente, dependen del juego de poder que pueden utilizar en sentido variable esas condiciones económicas. (...).

Sabemos que el curso concreto de la historia, aunque sea señalado por condiciones dadas, depende en gran parte de la osadía de quienes se proponen actuar en función de fines históricamente viables. Por tanto, no incurrimos en la vana pretensión de intentar delimitar teóricamente el curso probable de los acontecimientos futuros. Éste dependerá, más que de las previsiones teóricas, de la acción colectiva encaminada por voluntades políticas que hagan factible lo que estructuralmente es apenas posible."

► ¿Qué semejanzas y qué diferencias pueden establecerse entre los enfoques de la teoría de la dependencia y el análisis integrado del desarrollo?

¿Qué elementos conceptuales tienen en común estos dos enfoques con el enfoque de la CEPAL?

LAS RESPUESTAS DE LOS SECTORES DOMINANTES

LOS ESTADOS UNIDOS Y LA "ALIANZA PARA EL PROGRESO"

Después de la Revolución Cubana, el gobierno de los Estados Unidos consideró como una seria amenaza para sus intereses la instalación de un gobierno aliado de la Unión Soviética en la región latinoamericana. Además de decidir acciones concretas contra el nuevo gobierno

—que fueron desde la expulsión de Cuba de la OEA, el establecimiento de un bloqueo económico por parte de casi todos los países latinoamericanos, excepto México, hasta un intento de invasión militar a la isla que fracasó—, el gobierno de los Estados Unidos también puso en marcha una estrategia para evitar la propagación de este tipo de experiencias en otros países de la región. Con este propósito, en 1961 el presidente John F. Kennedy lanzó la "Alianza para el Progreso".

La Alianza para el Progreso estaba pensada como un programa de ayuda económica a los países latinoamericanos —caracterizados como "en vías de desarrollo"— que se materializaría en créditos que debían ser usados por los gobiernos

para mejorar las condiciones de vida de los sectores más pobres de cada sociedad. Los fundamentos de este plan suponían que la amenaza del establecimiento de gobiernos anticapitalistas y aliados de la Unión Soviética estaba relacionada con los niveles de pobreza y miseria en los que vivía la gran mayoría de la población de los países subdesarrollados del Tercer Mundo. Desde el punto de vista del Departamento de Estado de los Estados Unidos, estas condiciones permitían que los militantes comunistas presentaran al socialismo como una eficaz vía para superar las desigualdades sociales y económicas y que tal mensaje fuera bien recibido por sectores mayoritarios de las sociedades latinoamericanas.

A partir de este diagnóstico, la Alianza para el Progreso buscó generar las condiciones para la estabilidad política a través de la reforma social y el achicamiento de las desigualdades económicas entre las sociedades desarrolladas y las que se encontraban en vías de desarrollo. Esperaba que el impulso del desarrollo económico tuviera como resultado la consolidación de la democracia política como forma de gobierno.

Sin embargo, la mayoría de los fondos prometidos no fueron entregados y los que llegaron no fueron aplicados a los objetivos previstos. A lo largo de la década de 1960, los países latinoamericanos tuvieron cada vez más dificultades para avanzar en el desarrollo económico y la consolidación de regímenes democráticos. Por lo contrario, fueron cada vez más numerosas las dictaduras militares que tomaron el gobierno.



El "Che" fue el delegado cubano en la reunión especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se realizó en Punta del Este (Uruguay) en 1961, en la cual John F. Kennedy presentó el programa de la "Alianza para el Progreso". En esa reunión, Guevara atacó el programa y denunció que la ayuda ofrecida no estaba destinada a promover un verdadero desarrollo económico a través de una industrialización masiva y escamoteaba la solución de fondo: "Es de hacer notar, señores delegados —dijo—, que el tema de la industrialización no figura en el análisis de los señores técnicos. Para los señores técnicos, planificar es planificar la letrina. Lo demás, ¡quién sabe cuándo se hará!" Y agregó: "¿Por qué no se dan dólares para equipos, dólares para maquinarias, dólares para que nuestros países subdesarrollados, todos, puedan convertirse en países industriales, agrícolas, de una vez? Realmente, es triste".

LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL

La *Doctrina de la Seguridad Nacional* (DSN) surgió en el contexto del conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, en condiciones de paridad de armamento nuclear de las dos potencias, y fue aplicada en los países del Tercer Mundo que estaban bajo influencia estadounidense. Según los principios de esta doctrina, los Estados Unidos y sus aliados militares en la OTAN tenían la responsabilidad de mantener el equilibrio frente a la URSS y su sistema de alianzas, y los gobiernos de los países periféricos que formaban parte del bloque capitalista debían evitar que el “peligro comunista” o, más en general, “la subversión”, ganara terreno en sus respectivos territorios.

Para las fuerzas armadas latinoamericanas, la adopción de la DSN significó abandonar la *Doctrina de la Defensa Nacional*, que concebía la organización de las fuerzas armadas del país según el concepto clásico de “nación en armas” y consideraba como hipótesis de guerra la provocada por un enemigo externo a las fronteras nacionales. La DSN, en cambio, aceptaba la integración de las fuerzas armadas nacionales en los dispositivos internacionales de defensa creados por los Estados Unidos y definía como hipótesis de conflicto los provocados por un “enemigo interno”. Establecía como tarea de las fuerzas militares locales controlar las fronteras ideológicas, vigilar las actividades políticas de la ciudadanía y, eventualmente, reprimir las manifestaciones políticas de los ciudadanos que, desde su punto de vista, fueran “subversiva”.

Desde la década de 1940, la Doctrina de la Defensa Nacional había puesto énfasis en la necesidad de la autosuficiencia económica del país y las fuerzas armadas se habían comprometido en la protección de la industria nacional con el objetivo de garantizar las necesidades estratégicas de abastecimiento y asegurar el control nacional sobre el sistema de decisiones globales en la economía. Para esta doctrina no había defensa nacional posible sin base industrial propia y sin control estatal sobre las decisiones básicas de inversión. En la década de 1960, la adopción de la DSN modificó sustancialmente las ideas sobre la relación entre defensa, seguridad y desarrollo. La nueva doctrina militar contenía una concepción de nación que aceptaba la subordinación económica a los Estados Unidos como consecuencia de la subordinación estratégica. Desde entonces, las fuerzas armadas latinoamericanas siguieron sosteniendo la necesidad de profundizar el desarrollo industrial, pero en su gran mayoría aceptaron la injerencia de los capitales extranjeros en las decisiones económicas. Al mismo tiempo, en varios países como en Perú, Panamá y la Argentina se diferenciaron grupos de militares que adherían a los principios del nacionalismo económico y manifestaron posiciones antiimperialistas.

Atlas, páginas 54 y 55



► ¿Qué conceptos de la Doctrina de la Seguridad Nacional rechazó el general Torrijos, jefe del gobierno de Panamá, en su discurso frente a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU en marzo de 1973?

La seguridad del hemisferio occidental

Los operativos de maniobras militares conjuntas entre las fuerzas armadas estadounidenses y las de países latinoamericanos fueron parte de la política pro hemisférica de los Estados Unidos. Después de la Revolución Cubana, los Estados Unidos intensificaron las actividades de la Junta Interamericana de Defensa (JID) —creada en 1948— a través de “Programas de Ayuda Militar” (PAM). Éstos se canalizaban a través de convenios de asistencia material en equipos y armamentos, los que justificaron el establecimiento de misiones militares que, con el pretexto de supervisar la utilización de esa asistencia, se instalaban en puntos clave de los comandos de las fuerzas armadas locales. La JID también programó un “Plan de Defensa Continental” para enfrentar la “amenaza subversiva”. A partir de 1959 se puso en marcha un nuevo mecanismo: las conferencias de ejércitos, armadas o fuerzas aéreas americanas que nucleaban a las más altas jerarquías de las instituciones castrenses de la región.



El líder nacionalista panameño Omar Torrijos llegó al poder en 1968.



Militarismo y dictadura en América latina

"En 1964, en la V Conferencia de Ejércitos Americanos —realizada en el instituto militar de West Point en los Estados Unidos—, el entonces comandante en jefe del ejército argentino, general Juan Carlos Onganía, proclamó el derecho de las instituciones militares a intervenir en la política interna de las sociedades a las que pertenecían cuando los gobiernos constitucionales 'violen las respectivas cartas magnas, no cumplan las leyes y/o no den soluciones a los problemas nacionales'. La después llamada 'doctrina West Point' fue incorporada a la Doctrina de la Seguridad Nacional y estableció una relación netamente intervencionista entre fuerzas armadas y sistema político. Sobre estas bases, en las décadas de 1960 y 1970, en América latina, fueron numerosas las experiencias militaristas que establecieron 'dictaduras' como forma de gobierno y excluyeron de la participación política a la población.

La dictadura es una forma de ejercer el poder del Estado que se caracteriza por la concentración de facultades extraordinarias en un individuo o un grupo. En las décadas de 1960 y 1970, en América latina, el concepto de dictadura estuvo fuertemente asociado al militarismo de las fuerzas armadas de la región. De allí que el término 'dictadura militar' es el más frecuentemente utilizado para caracterizar los gobiernos de facto establecidos por las fuerzas armadas después de los golpes de Estado."

Torcuato S. Di Tella *Diccionario de ciencias sociales y políticas*, (coord.), 1989.

Los gobiernos militares de la década de 1960

Durante la década de 1960, en un gran número de países de América latina, las fuerzas armadas dieron "golpes militares" y se hicieron cargo del gobierno.

Si bien la situación económica, social y política de cada país era diferente y cada sociedad enfrentaba problemas particulares, la actuación de las fuerzas armadas tuvo algunos mismos objetivos en todos los casos.

Las acciones de los focos guerrilleros que habían surgido en diversas y distantes regiones de América del Sur y América Central fueron percibidas por los sectores dominantes como una seria amenaza para sus intereses económicos. Al mismo tiempo, y de acuerdo con los postulados de la Doctrina de la Seguridad Nacional, las fuerzas armadas los identificaron como los "enemigos internos" que debían aniquilar para evitar que "subvirtiera" el orden capitalista y el "modo de vida occidental y cristiano" y facilitaran la penetración del "comunismo internacional".

En el plano económico, las acciones de los gobiernos militares también compartieron algunas orientaciones generales. Antes de las intervenciones de los militares, la gran mayoría de las sociedades enfrentaban altas tasas de inflación, desequilibrios en la balanza comercial y de pagos y déficit fiscal. Al mismo tiempo, como resultado de los "planes de estabilización" que los gobiernos habían intentado aplicar para solucionar esos problemas (y que incluían medidas tendientes a restringir el consumo de los sectores populares, como, por ejemplo, del congelamiento de los salarios), se habían multiplicado las movilizaciones y los reclamos de los sindicatos y los partidos políticos en general.

Frente a esta situación, en el plano político y social, las fuerzas armadas organizaron la represión contra los grupos guerrilleros y prohibieron o restringieron la actividad de los partidos políticos y la actividad sindical, en particular la de orientación socialista y comunista. En el plano económico, los militares siguieron políticas antiinflacionarias y procuraron equilibrar la balanza de pagos con el propósito de restablecer la "confianza" de los sectores capitalistas locales y extranjeros. Pero, al mismo tiempo, mantuvieron las políticas orientadas hacia la profundización industrial que venían desarrollando los gobiernos anteriores. Con este fin, en algunos países, como Brasil y la Argentina, los gobiernos militares ampliaron la apertura de la economía a las inversiones de capital extranjero. En otros, como Perú, por ejemplo, iniciaron o completaron la nacionalización de algunos sectores clave de la economía, razón por la que contaron con la adhesión de una gran parte de las masas populares.

Los gobiernos militares de la década de 1970

En la década de 1960, la mayoría de los golpes de Estado encabezados por las fuerzas armadas habían tenido una intención preventiva y restauradora. En la década de 1970, las intervenciones militares tuvieron una orientación más radical. Desde el punto de vista de los sectores capitalistas de mayor poder económico que, en general, apoyaron los golpes, éstos resultaban necesarios para evitar la destrucción del orden económico y social capitalista. Durante los años sesenta, la instalación de gobiernos "comunistas" aparecía como una amenaza probable pero no inminente. En cambio, en el Uruguay entre 1972 y 1974, en Chile de 1973 y en la Argentina de 1976, los grupos dominantes consideraron que los partidos políticos y las organizaciones guerrilleras estaban poniendo en juego la supervivencia de la condición capitalista de las sociedades.

EL DISCIPLINAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL

Frente a este panorama, los militares y los grupos de civiles que los apoyaron se propusieron implantar un nuevo orden social, político y económico. Con esta meta, prohibieron la actividad de los partidos políticos y de los sindicatos y organizaron acciones militares para "liquidar" definitivamente las organizaciones guerrilleras y toda otra organización popular o personas consideradas "subversivas" o "sospechosas". También se propusieron "normalizar la economía". Para ello los gobiernos militares encararon políticas económicas que significaron profundos quiebres con la orientación general que venían experimentando las economías latinoamericanas desde 1930, cuya meta era alcanzar el desarrollo autosustentado a partir de la profundización industrial.

Los equipos técnicos que se hicieron cargo de los ministerios de Economía —integrados por economistas y empresarios estrechamente vinculados con el capital transnacional— diseñaron políticas inspiradas en los principios del neoliberalismo económico. Algunas de las medidas intentaban resolver los problemas de corto plazo —tales como liquidar la inflación y controlar el déficit fiscal. Otras tenían metas a mediano y largo plazo: abandonar la industrialización como sector dinámico del desarrollo económico y adecuar las economías periféricas a la "nueva división internacional del trabajo", reorientando las inversiones hacia la explotación del sector primario —minero en particular— y hacia las agroindustrias que podían agregar valor a las exportaciones tradicionales.



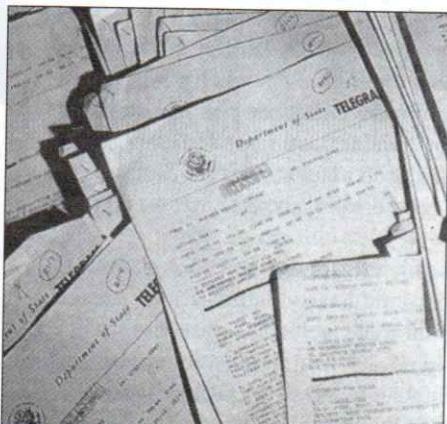
La feroz represión contra los grupos guerrilleros y las organizaciones de los sectores populares que aplicaron las dictaduras militares latinoamericanas durante la década de 1970 significó la violación de los derechos humanos fundamentales de las personas de las víctimas. Hacia fines de la década de 1990, sus familiares acompañados por importantes sectores de la sociedad de cada país, no olvidan y exigen justicia y castigo a los culpables.

La participación de los Estados Unidos

Los golpes militares en América latina, tanto en la década de 1960 como en la de 1970, en general, contaron con el apoyo de los gobiernos de los Estados Unidos. En algunos casos, además, como en el golpe que en 1973 derrocó al presidente chileno Salvador Allende, personal de los servicios de inteligencia estadounidense participó activamente en la preparación. Un memorándum de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América (CIA), fechado el 16 de septiembre de 1970, proporciona información sobre el primer encuentro entre el jefe de la CIA y altos funcionarios especializados en operaciones encubiertas. El documento subraya que la CIA debía preparar en 48 horas un plan de acción para el entonces consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger. Textualmente se lee: "El presidente Nixon ha decidido que un gobierno de Salvador Allende en Chile no es aceptable para los Estados Unidos. El presidente pidió a la agencia (CIA) evitar que llegue al poder o destrozarlo. El presidente autorizó diez millones de dólares para este fin".

La orientación de las políticas económicas adoptadas tuvo graves consecuencias para los sectores populares de las sociedades latinoamericanas, que vieron seriamente restringidas sus posibilidades de consumo y la satisfacción de sus necesidades básicas. Medidas de corto plazo, tales como la liberación de todos los precios salvo el de los salarios, la eliminación de todos los subsidios a la industria y al consumo popular y la completa apertura y liberalización del mercado de capitales, además de producir una importante transferencia de ingresos desde los sectores asalariados hacia los sectores capitalistas más concentrados, provocaron una profunda reorganización del sector industrial. A su vez, este último proceso —más, en algunos casos, la completa apertura del mercado interno a las importaciones de manufacturas industriales extranjeras— provocó la quiebra de numerosas pequeñas y medianas empresas y generó desempleo, en particular entre los obreros industriales. En el marco del agravamiento de la crisis económica, el aumento de la desocupación y la desestructuración del movimiento sindical fueron otros elementos a través de los cuales las dictaduras militares impusieron el disciplinamiento político y social.

La compleja situación económica internacional, las decisiones que tomaron los sectores dominantes para enfrentarla y los conflictos internos que protagonizó cada sociedad latinoamericana gobernada por una dictadura militar provocaron un mayor o menor grado de éxito en el logro de los objetivos de corto y largo plazo que, en cada caso, se habían propuesto. Al mismo tiempo, durante la década de 1970, todos los países de la región experimentaron un muy importante crecimiento del endeudamiento externo, situación que agravó la vulnerabilidad de sus economías y profundizó su dependencia de los centros capitalistas.



Archivos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos que prueban que el gobierno de ese país fue informado con anterioridad de las características y los detalles del golpe militar que el 24 de marzo de 1976 derrocó al gobierno constitucional en la Argentina.

► ¿Cuáles fueron las transformaciones económicas, sociales, políticas e ideológicas más importantes que experimentaron las sociedades periféricas latinoamericanas entre 1930 y 1990?

¿Hacia 1990, las economías de las sociedades latinoamericanas eran más o menos vulnerables que en 1930? ¿Por qué?

China: la revolución socialista de Mao Tsé-tung

Durante el siglo XIX, el imperio chino fue un mercado codiciado por las potencias europeas y, más tarde, por Japón y los Estados Unidos. Aunque China no fue colonizada, las luchas sociales y políticas que se produjeron en las primeras décadas del siglo XX estuvieron relacionadas con la intervención de potencias extranjeras. Al finalizar esas luchas, China se convirtió en un Estado socialista de gran influencia entre los países del Tercer Mundo.

El proceso histórico que culminó con el triunfo de la revolución socialista se inició en 1911, cuando una rebelión intentó reemplazar el antiguo imperio por una república. Pero ésta no logró consolidarse debido al poder económico y militar que tenían los grandes terratenientes—los “señores de la guerra”—, que se negaban a aceptar un gobierno centralizado. Por entonces, la sociedad china era mayoritariamente rural, con un 85% de campesinos, escasa industrialización y débil urbanización.

Finalmente, en 1923, se impuso un gobierno que unificó el país, con el apoyo de dos fuerzas: los nacionalistas del Kuomintang (Partido Nacional del Pueblo), dirigidos por el general Chiang Kai-shek, y los comunistas, liderados por Mao Tsé-tung. La alianza duró poco tiempo. El Kuomintang, apoyado por sectores medios y burgueses, era partidario de “occidentalizar” China y poner en marcha una reforma política moderada. Los comunistas, en cambio, proponían transformaciones sociales y económicas profundas, tales como repartir los latifundios entre los campesinos sin tierra. En 1927, el general Chiang Kai-shek, apoyado por los terratenientes y por los Estados Unidos, expulsó a los comunistas del gobierno e instauró una dictadura militar.

El Partido Comunista Chino (PCCh) inició entonces una activa campaña en las zonas rurales y movilizó a los campesinos contra las tropas del gobierno, ocupando las tierras de los grandes latifundistas. De este modo, los comunistas lograron simultáneamente organizar el Ejército Rojo para enfrentar al Kuomintang y repartir las tierras entre los campesinos.

Mao Tsé-tung (1893-1976) nació en una familia campesina de clase media y trabajó como maestro. En 1921 fundó el Partido Comunista Chino y presidió la República Popular

China desde su creación –el 1º de octubre de 1949– hasta el año de su muerte. En contra de las opiniones de otros comunistas chinos que sostienen

que sólo la clase obrera podía encabezar un proceso revolucionario socialista, Mao creía que el potencial revolucionario en China estaba en el campesinado. En las décadas de 1960 y 1970, las ideas de Mao tuvieron una fuerte influencia en muchos militantes

de izquierda en Europa y América Latina. En la imagen, el joven Mao dialoga con campesinos de la región de Yenán (1939).



LA "LARGA MARCHA" Y LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

Mapa N° 69



© Alque Grupo Editor. Prohibida su reproducción.

El gobierno desplegó sus tropas sobre los territorios controlados por los comunistas. Frente a esta ofensiva, en octubre de 1934, 100.000 personas, entre soldados y oficiales del Ejército Rojo y comunistas seguidores de Mao, iniciaron una marcha —llamada la *Larga Marcha*— hacia el norte del país. Los comunistas chinos recorrieron 9.600 kilómetros, luchando permanentemente contra las fuerzas del Kuomintang, el hambre y la enfermedad. Finalmente, en octubre de 1935, Mao y los 8.000 sobrevivientes instalaron su cuartel general en la región de Yenán, donde organizaron una república de carácter socialista.

Entre 1937 y 1945, la invasión japonesa detuvo momentáneamente la guerra civil. Las fuerzas del Kuomintang y del Partido Comunista se aliaron para luchar contra el enemigo exterior. Cuando el fin de la Segunda Guerra Mundial marcó el fin de la guerra con Japón, la lucha se reanudó.

En la región que estaba bajo el mando de Chian Kai-shek, la situación de pobreza de la población se agravaba, mientras que el general y su familia ejercían el poder de manera despotica. La ayuda financiera de los Estados Unidos —que, con el propósito de evitar el “avance comunista”, enviaba dinero, armas y medicamentos al Kuomintang— no era suficiente y parte de esa ayuda quedaba en manos de los funcionarios y los oficiales del régimen dictatorial. El gobierno se desacreditó rápidamente y la crisis se profundizó.

El deterioro del Kuomintang fortaleció la posición política de los comunistas liderados por Mao —quienes aparecieron como los únicos que habían enfrentado al enemigo japonés, sin asistencia exterior— y favoreció la difusión de sus propuestas de cambios revolucionarios para mejorar las condiciones de vida de los campesinos. En sus discursos, Mao logró articular ideas nacionalistas con una propuesta de cambio social.

En 1949, el Ejército Rojo logró controlar todo el territorio del país y proclamó la creación de la República Popular China. En el plano económico, las primeras acciones más importantes del nuevo Estado fueron la extensión de la reforma agraria en todo el país —se expropiaron campos a los terratenientes que no trabajaban sus tierras y a los que empleaban mano de obra asalariada—; la nacionalización de la industria de capital extranjero y la elaboración de un “Plan Quinquenal” para desarrollar rápidamente la industria pesada.



Un soldado veterano explica las enseñanzas de Mao a jóvenes reclutas del Ejército Rojo.



Mao y Chou En-lai, jefes del Ejército Rojo, a la cabeza de la "Larga Marcha".

Mao, Stalin y el Tercer Mundo

El Partido Comunista Chino, bajo la dirección de Mao, mantuvo una estrecha relación con la Unión Soviética de Stalin. En un principio, Mao siguió el modelo soviético para la construcción de la sociedad socialista, mediante la redistribución de la tierra, la creación de la industria pesada y el establecimiento de una burocracia centralizada. Pero luego de la muerte de Stalin, en 1953, se fue distanciando de la dirigencia soviética hasta romper abiertamente con la URSS en 1960. A partir de 1956, Mao comenzó a delinejar una política alternativa de construcción del socialismo relacionada con las características particulares de la sociedad china, fundamentalmente campesina. Desde el punto de vista económico, rechazó la importancia concedida por los soviéticos a la industria pesada y centró sus expectativas en el trabajo intensivo de pequeñas comunidades campesinas antes que en el desarrollo de una agricultura cooperativa tecnológicamente avanzada. En el plano político, lanzó la campaña "dejar florecer cien flores" con el objetivo de asegurarse el apoyo de los intelectuales, permitiéndoles criticar a la burocracia. En 1957, Mao criticó la negación que hacían los soviéticos de la existencia de contradicciones en la sociedad socialista e insistió en que el conflicto era inevitable y saludable. A partir de su alejamiento del bloque soviético, los comunistas chinos acercaron sus posiciones al bloque de países del Tercer Mundo que había comenzado a organizarse en Bandung, en 1955.

Ante las dificultades para producir la cantidad de alimentos necesarios para una población de más de 500 millones de habitantes, en 1958, Mao impulsó la política llamada del "Gran Salto Adelante". Con el propósito de lograr el aumento de la producción agrícola e industrial, avanzó hacia la completa colectivización del campo —fueron eliminadas las cooperativas y toda otra forma de propiedad privada— y movilizó a la población comprometiéndola en la organización de "comunas" que debían alcanzar el autoabastecimiento. La experiencia fracasó por dos años de malas cosechas y la precariedad tecnológica e industrial de las comunas.

A pesar de las dificultades que enfrentó, después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado socialista chino se convirtió en una de las grandes potencias del mundo. Aunque su poderío industrial y tecnológico no era equivalente al de los Estados Unidos y la URSS, su enorme peso demográfico lo convirtió en la principal potencia militar del Oriente.



Durante la Revolución Cultural, las calles de las principales ciudades se cubrieron de grandes carteles (dazibaos), en la que los maoístas comunicaban sus propuestas para profundizar el socialismo y eliminar los restos de sociedad burguesa. Mao escribió su propio dazibao con las consignas: "Destruzcemos todos los controles, bombardeemos el cuartel general del Partido".

► ¿Qué factores internos y externos de la situación que vivía China en la década de 1950 permiten explicar que Mao considerara a la agricultura y no a la industria pesada como la actividad económica que impulsaría "el gran salto hacia adelante" de la sociedad China?

LA "REVOLUCIÓN CULTURAL"

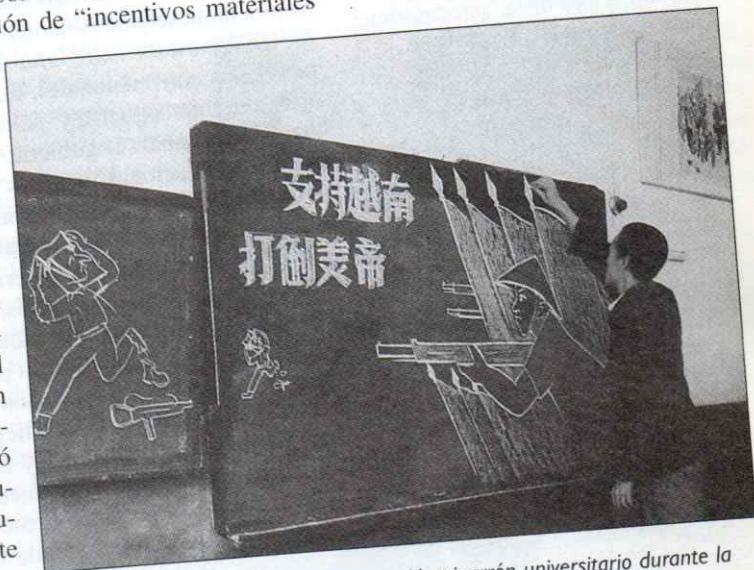
Desde principios de la década de 1960, los dirigentes del Partido Comunista Chino (PCC) discutieron sobre cuál era la orientación económica y política que debía seguir el proceso de construcción del socialismo en China. Mao consideraba que debía profundizarse la colectivización rural y la eliminación de todas las diferencias sociales. Advertía que en el PCC se había consolidado un sector de "burócratas" que tenía privilegios y abusaba de su poder político. Mao acusó a este sector de cometer "desviaciones liberales", "aburguesar el Partido" y servir a los dictados de la "camarilla" que gobernaba la URSS.

Las ideas de Mao fueron resistidas por los máximos dirigentes del Partido, que impulsaban la introducción de "incentivos materiales" para aumentar la producción y se oponían a que toda las tierras fueran de propiedad colectiva.

La lucha ideológica entre los "maoístas" y los "jerarcas" del Partido estalló en agosto de 1966, cuando los partidarios de Mao en el ejército, las milicias, las universidades y las comunas agrícolas lanzaron una campaña de debates y movilizaciones de masas para expulsar del PCC a "los dirigentes que seguían el camino capitalista". Durante varios meses, la sociedad china vivió en un estado de agitación y discusión al que se denominó "Revolución Cultural". Según Mao, este proceso, protagonizado por los sectores más jóvenes del PCC, debía aniquilar a los denominados "cuatro viejos": las viejas costumbres, los viejos hábitos, la vieja cultura y los viejos modos de pensar.

Los enfrentamientos entre los maoístas, que pensaban que la revolución necesitaba de un amplio debate ideológico, y los partidarios del "pragmatismo" condujeron a acciones de gran violencia y muchas personas murieron en esos meses. Ante la amenaza de la completa desorganización del PCC y la generalización del caos social, Mao moderó sus propuestas y, luego de reafirmar su liderazgo y de "purgar" a los "burócratas", logró estabilizar la situación política.

En 1976, luego de la muerte de Mao, retomó el poder la línea "pragmática", liderada por Deng Xiaoping. A partir de entonces se inició un proceso de "desmaoización", que incluyó la limitación de las expresiones opositoras a través de un duro control político por parte de la dirigencia del PCC y la introducción de reformas económicas orientadas a establecer en China sectores de "economía de mercado" que funcionan con relaciones de producción capitalistas y están abiertos a las inversiones de capital extranjero.



Un pizarrón universitario durante la Revolución Cultural, con la consigna lanzada por Mao: "El poder nace de la boca del fusil". Los intelectuales maoístas apoyaron la movilización de los "guardias rojos", jóvenes comunistas que tomaban las armas para consolidar la profundización de la revolución socialista.



2

Contrastes en el África negra descolonizada. En Somalia se afianzó un gobierno socialista que intentó la modernización económica por medio de la promoción de la industria y la tecnificación agrícola (1). En la República Centroafricana, el general Bokassa tomó el poder mediante un golpe de Estado, se proclamó emperador e impuso una dictadura pro occidental (2).

El panafricanismo

Kwame Nkrumah, el líder de Ghana —primer país negro independiente— defendió el *panafricanismo*, es decir, el ideal de un África unida. Afirmó: "Hay quienes sostienen que África no puede unirse porque carecemos de los tres ingredientes necesarios para la unidad: un pueblo, una cultura y una lengua comunes. Es cierto que hemos estado separados durante siglos. Las potencias coloniales fijaron hace tiempo los límites territoriales que nos separan, a menudo en forma bastante arbitraria. Algunos de nosotros somos musulmanes, algunos cristianos; muchos creen en dioses tradicionales de su tribu. Algunos hablamos francés, algunos inglés o portugués, para no mencionar a los millones que sólo hablan uno de los cientos de lenguas africanas diferentes. Hemos adquirido diferencias culturales que afectan nuestras posibilidades y condicionan nuestro desarrollo económico. (...) Sin embargo, me impresiona cuánto tenemos en común. No es sólo nuestro pasado colonial: es algo mucho más profundo. Puede describirse del mejor modo posible como un sentido de unidad en lo africano."

K. Nkrumah, África debe unirse, 1962.

SUDÁFRICA Y EL "APARTHEID"

El actual territorio de la República de Sudáfrica fue objeto de largas luchas entre los nativos zulúes y bantúes, los colonos holandeses que se habían establecido en él y Gran Bretaña. Finalmente, desde principios del siglo XX, pasó a estar bajo dominio británico.

Después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña reconoció el derecho del pueblo de la colonia a elegir sus autoridades locales. Pero para asegurar su continuidad en el gobierno, en 1948, los blancos, que eran minoría (tres millones frente a once millones de población nativa), prohibieron a los negros participar de las elecciones. Desde entonces, e incluso después de 1961, cuando Sudáfrica se separó de la comunidad de colonias británicas, los gobernantes blancos sudafricanos aplicaron el *apartheid*. Éste era un sistema de gobierno que defendía la superioridad blanca y la segregación (o separación) de las personas de color negro. Para transitar por el país, los negros debían llevar siempre un permiso o salvoconducto, sin el cual terminaban en la cárcel. Había, por ejemplo, medios de transporte, escuelas y barrios destinados a los blancos y otros des-

► ¿Qué obstáculos dificultaron la concreción de los proyectos panafricanistas? ¿Qué factores explican el éxito del panarabismo en relación con el panafricanismo?

tinados a los negros, quienes en casi su totalidad eran pobres. Aunque era mayoría, la comunidad negra no podía participar del gobierno.

La lucha de la población negra contra el *apartheid* fue organizada por el *Congreso Nacional Africano* (CNA), liderado por Nelson Mandela. Obligados a actuar en la clandestinidad, los militantes del CNA iniciaron, en 1961, una resistencia armada contra el gobierno de la minoría blanca. La matanza de opositores que realizaba la policía sudafricana y las leyes racistas provocaron reclamos y pedidos de condena en la ONU por parte de numerosos países del mundo. Finalmente, la resistencia popular y la presión internacional forzaron al gobierno de Pieter Botha a liberar a Mandela y a abolir el *apartheid* en 1991. En 1994 se celebraron las primeras elecciones en las que pudieron votar los negros y Mandela fue elegido presidente de Sudáfrica.



Nelson Mandela comenzó a militar en el CNA en 1944 y se convirtió en la figura más importante de la resistencia negra contra el *apartheid*. En 1952 se le aplicó la Ley de Represión del Comunismo y fue detenido. En 1956 se lo volvió a juzgar por "traición a la patria". Luego, desde la clandestinidad, dirigió la lucha armada de las guerrillas del CNA. En 1962 fue nuevamente detenido y condenado a cadena perpetua. Después de casi treinta años en la cárcel, fue liberado en 1990. Su prisión se transformó en el símbolo de la opresión de los negros por los blancos. En 1998, la sociedad sudafricana inició un proceso de revisión de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado racista. En la foto, el presidente Mandela recibe del obispo Desmond Tutu los testimonios reunidos sobre el accionar de la represión.

Biko y la "Conciencia Negra"

Steve Biko nació en 1946 en King William's Town, Sudáfrica, en una familia modesta; su padre era asalariado y su madre empleada doméstica. Por sus acciones sociales a favor de su pueblo fue expulsado de la secundaria pública, aunque pudo concluir sus estudios en una escuela católica y en 1966 ingresó en la Escuela de Medicina de la Universidad de la ciudad de Natal (Sudáfrica). En 1968 fundó la Organización de Estudiantes Sudafricanos (SASO), integrada sólo por negros, con el propósito de comenzar a difundir su idea de la necesidad de reconstruir la "conciencia negra". Biko sostén que en un país donde los negros eran la mayoría abrumadora (en proporción de 5 a 1), la dominación blanca se perpetuaba porque "había logrado posesionarse de la mente de los negros". Según Biko, tras generaciones de explotación, los blancos se habían convencido de que el negro era inferior; y éstos, por su parte, habían desarrollado un sentimiento de dependencia y sumisión. A partir de estas ideas impulsó el movimiento denominado "Conciencia Negra", que proponía la adopción de una filosofía de lo cotidiano orientada a devolverle al negro sometido su sentido de dignidad y la confianza en sí mismo. Este movimiento nunca fue un partido político.

En 1973, el gobierno sudafricano consideró peligroso a este movimiento y aplicó a Biko el régimen de aislamiento: le prohibió salir de su pueblo, reunirse con más de dos personas y publicar por cualquier medio sus escritos. Durante 1974, ilegalizó la organización Conciencia Negra y Biko fue arrestado junto con otros dirigentes. En mayo de 1976, durante el transcurso del juicio al que fue sometido, Biko volvió a hablar en público y dio un testimonio de tres días en favor de sus compañeros detenidos. En agosto de 1977 fue detenido nuevamente por la policía sudafricana y el 12 de septiembre murió víctima de las torturas a los 31 años de edad.

AFGANISTÁN: EL FUNDAMENTALISMO DE LOS TALIBANES

Entre 1979 y 1989, Afganistán estuvo ocupado por tropas soviéticas. Tras la disolución de la URSS y la retirada de sus ejércitos, un grupo guerrillero islámico —los talibanes— enfrentó y derrotó al gobierno afgano. Impregnado de un fuerte conservadurismo religioso, el movimiento talibán considera que el Corán y los principios del Islam son los que deben regir toda la vida social y política del país.

Desde 1992, los talibanes comenzaron a organizar un Estado sustentado en la aplicación inflexible de la *Sharia* (ley islámica) y no toleran ningún tipo de conducta que se aparte de sus principios. Los talibanes han establecido una serie de medidas que afectan la vida cotidiana de los afganos en general y de las mujeres afganas en particular —como la prohibición de la televisión y el cine, la obligación de usar un determinado tipo de vestimenta, el control del largo de la barba de los varones y la prohibición de que las mujeres estudien o trabajen fuera de su casa, entre muchas otras.

La intolerancia del fundamentalismo talibán generó acciones de extrema violencia que alcanzaron una gran repercusión internacional. Los juicios sumarios y las penas de ahorcamiento en la vía pública de opositores o de quienes eran acusados de violar las normas del Corán —el adulterio, por ejemplo, está penado con la muerte— provocaron la fuga de un cuarto de millón de afganos hacia países limítrofes como Pakistán, país en el que la práctica de la religión islámica es mucho más tolerante. Mientras que en Afganistán, por ejemplo, las mujeres no tienen derecho a votar ni a salir a la calle si no están acompañadas por un pariente de sangre de sexo masculino y vestidas con una larga túnica; en Pakistán, una mujer, Benazir Bhutto, ocupó el cargo de Primer Ministro. Elegida por primera vez en 1988 y reelegida en 1993, Bhutto fue la primera mujer en ocupar un cargo político tan importante en un país musulmán.

Se calcula que hay en el mundo alrededor de 1.200 millones de personas que profesan la religión musulmana, mientras que existen actualmente cuarenta y siete países en los que, con distintas modalidades, el Islam constituye la base fundamental de la organización de sus leyes y de sus Estados.

Fundamentalismos y particularismos

“Etimológicamente, la palabra ‘fundamentalismo’ significa ‘el retorno a las raíces de uno mismo y de sus orígenes’. Los islámicos sostienen que sus raíces son el Corán y las acciones y dichos del Profeta Mahoma.

El término fundamentalismo, sin embargo, no proviene del Islam ni es utilizado por los movimientos islámicos. Originariamente fue utilizado por un grupo de protestantes estadounidenses que a principios de siglo XX publicaron una serie de doce libros titulados *Los fundamentalistas: el testimonio de la verdad*, como una respuesta frente a lo que percibían como la decadencia de los fundamentos de su fe religiosa y de sus tradiciones.

En las últimas décadas del siglo XX, frente a la “aldea global”, además de los fundamentalismos, también han proliferado diversos movimientos —constituidos a partir de la solidaridad de grupo entre individuos que tienen algún interés particular en común— denominados ‘particularismos’. Pero estos grupos o movimientos —entre los que se encuentran, entre muchos otros, los grupos ecologistas, los feministas, los de autoayuda, los que luchan por el reconocimiento de los derechos civiles de los homosexuales y hasta aquellos que se agrupan para luchar a favor o en contra de los particularismos más inverosímiles—, a diferencia de los fundamentalismos, no hacen de sus particularismos una cosmovisión, ni pretenden que su verdad es la única verdad y no persiguen la dominación o eliminación del otro.”

Susana Chames y Beatriz Ruiz, *Fundamentalismo: clamor de una particularidad*, 1998.



La Intifada, conocida como la "guerra de las piedras", dividió a la opinión pública internacional. En algunos sectores, reforzó la idea de la necesidad de crear un Estado Palestino para solucionar el conflicto en Medio Oriente.

Para otros, se trató de una muestra más de que las organizaciones políticas del pueblo palestino no resultan confiables para negociar un acuerdo de paz. Para una minoría de militantes tradicionalistas judíos, Israel debe ser un Estado teocrático y no admiten ninguna negociación con los palestinos de origen árabe. El fundamentalismo de algunos sectores sionistas es una dificultad para que los sectores de derecha y de izquierda del Parlamento israelí lleguen a un acuerdo para negociar con la OLP.



En la foto, manifestación de judíos ultraortodoxos en Israel (mayo de 1998). En la pancarta dice: "lamentamos los cincuenta años de existencia del Estado de Israel".

EL DIFÍCIL PROCESO DE PAZ EN MEDIO ORIENTE

Durante las dos últimas décadas del siglo XX, en la región del Medio Oriente persistieron los violentos conflictos entre los palestinos de origen árabe y religión islámica y el Estado de Israel, cuya población, en su gran mayoría, profesa la religión judía. Pero en esos años el escenario del conflicto no se limitó al territorio israelí. El vecino país del Líbano y, en particular su capital, Beirut, fueron un campo permanente de batalla en el que participaron guerrilleros islámicos, milicias cristianas y, en ocasiones, tropas del ejército de Israel. La concepción fundamentalista de muchos de los cristianos, musulmanes y sionistas que se enfrentaron en la región agudizó el nivel de violencia de los combates, en los que murieron miles de civiles y militares. La situación de guerra civil que vivió el Líbano y la virtual inexistencia de una autoridad que lograra unificar el país hizo que comenzara a utilizarse la expresión "libanización" como sinónimo de disolución de un Estado y de una sociedad.

La dinámica del conflicto se potenció con las acciones terroristas de grupos fundamentalistas islámicos como *Hamas* y *Jihad Islámica*, que en diversas oportunidades colocaron explosivos en ciudades israelíes y causaron cientos de víctimas entre la población civil. Estos atentados —que los fundamentalistas islámicos justificaban declarando que toda forma de ataque a Israel estaba legitimada porque el Estado judío oprimía al pueblo árabe— llevaron a los sectores más conservadores y tradicionalistas del sionismo a promover "acciones de represalia" contra el "terrorismo palestino".

Uno de los episodios más sangrientos de esta guerra fue la masacre de miles de palestinos en los campamentos de refugiados de Sabra y Chatila (sur del Líbano) en 1982, llevada a cabo por las milicias cristianas con el apoyo del ejército israelí.

A pesar del clima de violencia generalizado, entre palestinos e israelíes se fueron afirmando dos sectores políticos que se mostraron favorables a iniciar un proceso de paz y de convivencia en la región: la OLP liderada por Yasser Arafat y el Partido Laborista de Israel encabezado por Simón Peres, primer ministro a partir de las elecciones de 1984.



Símpatizantes de la OLP con un retrato de Arafat en Cisjordania.

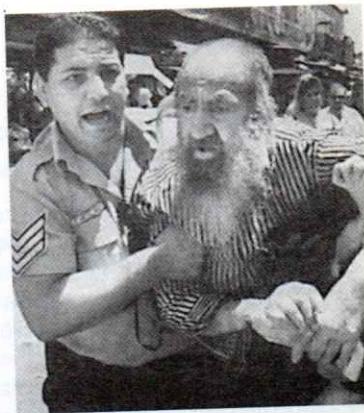
Sin embargo, en 1987, el conflicto se agudizó nuevamente cuando estalló un movimiento popular de la población palestina llamado *Intifada* (en árabe, levantamiento). Muchos jóvenes palestinos hostigaron a las tropas israelíes estacionadas en los territorios ocupados lanzándoles piedras. La respuesta del ejército que reprimió con violencia a los jóvenes desarmados provocó protestas de los gobiernos de varios países en la ONU y también dividió a los ciudadanos judíos de Israel. Los dirigentes del *Likud*, partido político que representa a los sectores más conservadores del sionismo, sostuvieron que el apoyo de la OLP a la *Intifada* demostraba que se trataba de un grupo terrorista con el que no se debía negociar.

De manera bastante sorpresiva, en 1993, luego de negociaciones secretas, Arafat y el primer ministro laborista de Israel, Isaac Rabin, firmaron en Washington un acuerdo de paz. La base del acuerdo era que Israel aceptaba la creación de una zona de autonomía palestina en la franja de Gaza y en Cisjordania. El objetivo final era llegar a constituir un Estado palestino independiente, gobernado por la OLP.

No obstante, el proceso de paz enfrentó dificultades debido a las acciones violentas de grupos fundamentalistas. En 1994, un colono judío mató en Cisjordania a veintinueve palestinos y en noviembre de 1995 un militante sionista de extrema derecha asesinó a Rabin —a quien los judíos más conservadores y tradicionalistas consideraban “traidor” por ceder ante el “enemigo árabe”.

En 1996, los atentados terroristas indiscriminados del grupo fundamentalista islámico *Hezbollah* —apoyado por Irán— y los bombardeos de “represalia” del ejército israelí en el Líbano complicaron aún más la situación. Además, el cambio de partido gobernante en Israel significó otra traba para el proceso de paz: en las elecciones celebradas en mayo de 1996 se impuso Benjamín Netanyahu, candidato del *Likud*, quien basó su campaña en el rechazo a la creación de la Autonomía Nacional Palestina.

Sin embargo, en noviembre de 1998, Arafat anunció que la zona de autonomía que él preside próximamente será reconocida como un Estado independiente. La solución pacífica del conflicto depende de la posición política que adopte la mayoría de los ciudadanos judíos de Israel y de la capacidad de la OLP para neutralizar a los sectores más intratables del activismo fundamentalista islámico.



Un israelí herido luego de un atentado de fundamentalistas islámicos en un mercado de Jerusalén (30-7-97).

Qué quieren los israelíes

- Que el principio orientador de las negociaciones de paz sea la absoluta seguridad de Israel y de sus ciudadanos.
- Que Jerusalén sea la capital indivisa de Israel. Sólo admite, allí, una presencia religiosa de musulmanes y cristianos.
- La derecha israelí se niega a retirar sus tropas de Hebrón, pese a que sus antecesores laboristas habían acordado con los palestinos una evacuación parcial de las fuerzas acantonadas en esa ciudad.
- Intensificar el establecimiento de colonias judías en la región de Cisjordania.

Qué quieren los palestinos

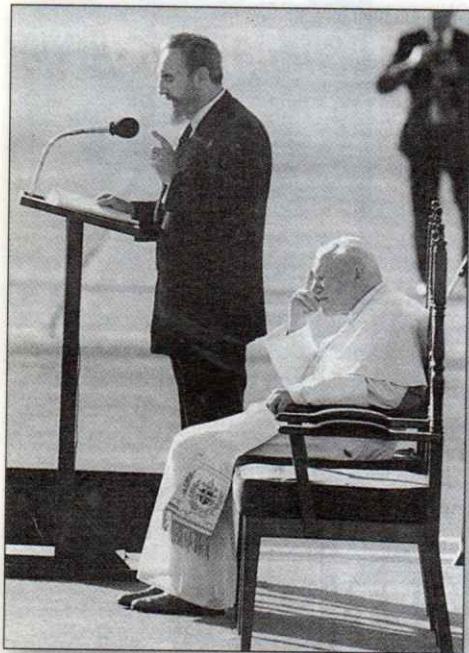
- Que el principio orientador de las negociaciones sea el intercambio de tierras por paz, y no el de seguridad.
- Que Jerusalén sea la capital de un futuro Estado palestino, cuya base territorial sería la franja de Gaza y Cisjordania.
- Piden el retiro total de las tropas israelíes de la ciudad cisjordana de Hebrón y recuerdan que ya habían acordado con los gobiernos laboristas una evacuación parcial de esa localidad.
- Rechazan la creación de nuevas colonias judías en los territorios ocupados.

EL BLOQUEO A CUBA

La situación económica cubana se deterioró notablemente desde la caída de la URSS: se restringió el consumo de la población por la falta de algunos productos básicos para la subsistencia cotidiana y por el encarecimiento del petróleo, que antes Cuba le compraba a la URSS a precios subsidiados.

Las dificultades de este "período especial"—según lo denominan las autoridades cubanas— se agravaron como consecuencia de las sanciones económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. A pesar del fin de la guerra fría y del mundo bipolar, el gobierno norteamericano continuó presionando a Cuba para debilitar al gobierno socialista y forzar una apertura de su economía. En 1996, el Congreso estadounidense sancionó la "Ley de solidaridad democrática y libertad cubana", conocida como "Ley Helms-Burton", que endurece el embargo económico sobre Cuba y, a la vez, dispone sanciones para cualquier otro país que comercie con la isla. Este último punto significa que el gobierno de Estados Unidos intenta que una ley de su Congreso tenga jurisdicción extraterritorial, pretensión que provocó la crítica de varios gobiernos que consideran que la ley Helms-Burton viola principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA.

A cuarenta años del triunfo de la Revolución Cubana, el gobierno de Fidel Castro se esfuerza por sostener el rumbo socialista de la economía e intenta quebrar el aislamiento internacional. Con este objetivo, en 1998, aceptó que el Papa Juan Pablo II visitara y celebrara misas en el país y logró que Cuba fuera reincorporada como miembro de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Intercambio). Hacia fines de ese mismo año, el gobierno cubano autorizó la instalación de la cadena de noticias norteamericana Associated Press en La Habana —de donde había sido expulsada en 1968; poco tiempo antes, había autorizado también la presencia permanente de la cadena televisiva CNN.



Fidel Castro y el papa Juan Pablo II, en la Habana (Enero 1998).



En la imagen, un mural en una calle de La Habana contra la ley "Helms-Burton".

La nuevas democracias en América latina

Durante la década de 1980 y los primeros años de la de 1990, casi todos los países de América latina protagonizaron los llamados "procesos de transición" desde los régimen autoritarios que habían establecido las dictaduras militares durante las décadas de 1960 y 1970 hacia la instalación de nuevos regímenes políticos democráticos. Estas transiciones, aunque tuvieron características particulares en cada país, también, compartieron algunas orientaciones.

En general, hacia 1980, después de años de dictaduras, en las sociedades latinoamericanas se registraba una profundización de la exclusión y marginación de amplios sectores populares —manifestada en altos índices de recesión y desocupación— y muchos de los problemas crónicos —como la inflación— se encontraban sin resolver. En este contexto social y político, el endeudamiento externo fue un factor que profundizó la crisis de los gobiernos militares que se vieron forzados a dejar de gobernar.

En la mayoría de los casos, la transición fue pactada entre los militares salientes y los dirigentes políticos más representativos de la sociedad civil, con mayor peso de unos u otros según los países.

A lo largo de la década de 1980, entre sectores mayoritarios de todas las sociedades latinoamericanas se fue consolidando la idea de la necesidad de reconstruir el régimen político democrático sobre nuevas bases, reimplantar un "Estado de derecho" como garante de las libertades civiles y juzgar y condenar las violaciones contra los derechos humanos cometidas por los militares durante las dictaduras.

Sin embargo, la gestión económica de los gobiernos militares había dejado una herencia difícil de remontar. A partir de la crisis de la deuda externa, la situación social se deterioró y el fenómeno de la hiperinflación que se manifestó hacia final de la década la agravó todavía más.

En este contexto, varias sociedades latinoamericanas depositaron su confianza en una figura presidencial fuerte —un líder capaz de controlar el "caos" económico. Éste fue el origen de un "hiperpresidencialismo" —como por ejemplo el caso de Alberto Fujimori en el Perú, entre otros—, frente al cual los otros poderes del Estado fueron relegados a un segundo plano.

Esta concentración de poder en la figura del presidente favoreció la aplicación de un conjunto de reformas neoliberales consideradas indispensables para la superación de la crisis económica —tales como las privatizaciones, la desregulación y la apertura de la economía— y que significaban el alineamiento de las nuevas democracias latinoamericanas con los postulados neoconservadores y neoliberales elaborados por los grupos de poder económico y político de los países capitalistas centrales —conocidos como el "Consenso de Washington".



Los jefes de Estado y de Gobierno de 34 países americanos se reunieron en la Cumbre de las Américas, realizada en Santiago de Chile, en abril de 1998. En esa oportunidad acordaron lanzar una lucha conjunta para erradicar la pobreza y el narcotráfico del continente.



En noviembre de 1998, se reunió en la ciudad de Mar del Plata (Argentina) la "Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo", organizada por la OEA. Los asistentes aprobaron el documento final denominado "Compromiso de Mar del Plata" que estableció las bases para la creación de un "Comité Interamericano Contra el Terrorismo" (CICTE), que tendrá la función de coordinar la "cooperación entre los países miembros de la OEA para combatir el terrorismo en el marco de la plena vigencia del derecho internacional, el respeto por los derechos humanos, el respeto a la soberanía de los Estados y el principio de no intervención".

LOS "SIN TIERRA"



A través de ocupaciones de tierra y marchas populares, los "Sin Tierra" presionan al gobierno para que haga efectiva la reforma agraria, según lo establece el artículo 184 de la Constitución de 1988 que dice: "Toda tierra improductiva debe ser expropiada con fines sociales". Entre el 2 de febrero de 1996 y el 2 de marzo de 1996, durante sesenta días, cientos de miles de campesinos sin tierra caminaron desde distintos puntos del país hacia Brasilia en reclamo de sus derechos.

En el Brasil, el proceso de tecnificación y modernización de la agricultura desarrollado a partir de 1960 expulsó masivamente a los campesinos de sus tierras y profundizó la concentración de la propiedad de las tierras. Entre 1960 y 1980, alrededor de treinta millones de personas dejaron el campo y migraron hacia las ciudades y la situación de los campesinos que se quedaron en las áreas rurales sufrió un gran deterioro. Disminuyó el número de los asalariados rurales permanentes que trabajan en las grandes propiedades y aumentó el de la mano de obra rural asalariada temporal. Estos factores incrementaron el sector de los campesinos sin tierras, que se fue ampliando cada vez más, debido a que millones de pequeños productores perdieron sus propiedades.

En 1984, algunos dirigentes campesinos vinculados con la Iglesia Católica del Brasil, en la región sur del país, fundaron el *Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)*. En 1975, la jerarquía eclesiástica —que apoyó el golpe de Estado en 1964 pero a partir de 1973 comenzó a cambiar de posición— creó la *Comisión Pastoral de la Tierra (CPT)*. Desde 1979 y hasta 1985, la CPT promovió, en esa zona, ocupaciones de terrenos por parte de familias de campesinos sin tierra. La nueva metodología de lucha de los campesinos sorprendió a los terratenientes. Estos respondieron rápidamente en forma violenta, utilizando fuerzas policiales para reprimir las ocupaciones.

Sin embargo, en el marco del proceso de transición hacia la democracia —que incluyó la realización, en 1984, de multitudinarias marchas en reclamo de elecciones directas— las luchas de los "Sin Tierra" tuvieron un fuerte apoyo entre amplios sectores de la población urbana. Toda la prensa comentó las novedosas acciones protagonizadas por los campesinos. Entre 1985 y 1989 las ocupaciones tuvieron un carácter masivo y lograron un alto grado de articulación entre ellas.

En 1985, el MST realizó un congreso nacional y bajo el lema "la tierra es para quien en ella trabaja" decidió realizar ocupaciones de tierras y asentamientos de campesinos en todo el país. Al mismo tiempo, los grandes terratenientes del país se organizaron en la Unión Democrática Ruralista (UDR) y comenzaron a usar fuerzas paramilitares; la represión policial y las órdenes judiciales de desalojo también se generalizaron. La represión avanzó sobre los campesinos y se registraron numerosos asesinatos, encarcelamientos y torturas.

A pesar de todo, en la década de 1990, la lucha de los "Sin Tierra" se intensificó. Se generalizaron las ocupaciones en todo el territorio y, a mediados de 1995, los campesinos involucrados directamente en el conflicto alcanzaron casi el millón de personas.

LOS ZAPATISTAS

El 1º de enero de 1994, en el Estado mexicano de Chiapas, el *Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)*, un grupo guerrillero liderado por el autodenominado "Subcomandante Marcos" y que cuenta con el apoyo de importantes sectores de los campesinos indígenas de la región, se rebeló contra el gobierno nacional. En ese día se producía la incorporación de México al *Tratado de Libre Comercio Norteamericano (NAFTA)*.

Los dirigentes del EZLN han denunciado la situación de extrema pobreza y marginación en la que viven los indígenas y campesinos de todo el país y consideran responsables de esas injusticias a los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que controló el gobierno de México durante décadas. Con el objetivo de modificar la situación, exigen que el gobierno restituya la propiedad de las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, mejore la distribución de la riqueza, asegure la participación de las diferentes etnias en el gobierno del Estado de Chiapas y del Estado federal y garantice el respeto por las tradiciones culturales de los grupos indígenas de todo el país. En el territorio del Estado de Chiapas se localizan importantes recursos naturales —tales como petróleo, maderas, minas y tierras fértils para la práctica agrícola—, pero, sin embargo, la gran mayoría de sus habitantes tienen sus necesidades básicas insatisfechas.

A medida que el EZLN avanzó y controló nuevas porciones del territorio chiapaneco, los campesinos indígenas tomaron el gobierno de varios municipios. Frente a estas acciones, el gobierno nacional dispuso el envío de topas federales a las ciudades tomadas por el EZLN. Los más graves enfrentamientos entre los indígenas y los campesinos y el Ejército federal tuvieron lugar en San Cristóbal de las Casas y Ocosingo, los dos centros más importantes del Estado de Chiapas. También han sido frecuentes los ataques de escuadrones paramilitares contra las poblaciones que apoyan a los zapatistas.

El gobierno mexicano envió como mediador al ex regente de la capital, Manuel Camacho Solís. El obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz, apoyó los reclamos de los indígenas y campesinos y se propuso interceder frente a las autoridades estatales y federales para frenar la violencia y negociar una salida pacífica al conflicto que garantizara e hiciera efectivos los derechos básicos de la población de Chiapas. A pesar de estos esfuerzos, las hostilidades continuaron.

En enero de 1996, el gobierno y la guerrilla acordaron incorporar a la Constitución de México el reconocimiento de la autonomía indígena. Meses después, el EZLN acordó transformarse en un grupo político para participar en la mayor democratización del país. Pero el diálogo quedó interrumpido, cuando en abril de 1998 el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley sobre los derechos de los indígenas distinto del pactado con los zapatistas.



Según Marcos, el "comandante" del proceso revolucionario es "el pueblo". Por eso, él se autodenomina "subcomandante".



Zapatistas en el entierro de los cuarenta y cinco indios tzotziles asesinados en Acteal (Estado de Chiapas), luego de una ofensiva militar del ejército mexicano.